

Reseñas

PAUL W. DRAKE, y Eduardo Silva, eds., *Elections and Democratization in Latin America, 1980-85*. Center for Iberian and Latin American Studies, University of California, San Diego, 1986, 335 pp.

En América Latina, la primera mitad de la década de los ochenta estuvo dominada por dos grandes temas: la democracia y la crisis económica. El libro editado por Drake y Silva estudia la difícil convivencia de la democratización y los problemas económicos en diversos países del continente. Los ensayos describen procesos electorales con significados distintos y en ocasiones divergentes, cuyos resultados son igualmente dispares. Los editores justifican el análisis conjunto de las elecciones en México o El Salvador y Brasil o Argentina, debido a que los comicios son importantes en sí mismos: pueden jugar tanto “un papel en la liberalización o democratización de regímenes autoritarios”, como “contribuir a la profundización o al derrumbe de regímenes democráticos”.¹ Se distingue así entre “elecciones liberalizadoras” —término que se aplica básicamente a los países del Cono Sur— y aquellas que se realizan fuera de los márgenes de la democracia y no inauguran por fuerza un proceso democratizador, como sería el caso de México.

Las elecciones en El Salvador en 1982 y 1984, y en Nicaragua en 1984, tienen características similares a las de México. Pero en los dos países centroamericanos, fue fundamental un factor externo: la presión del gobierno estadounidense. En El Salvador, el presidente Reagan buscaba erosionar la reticencia del congreso a otorgar una mayor ayuda a los militares salvadoreños en su lucha contra el Frente Democrático Revolucionario, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FDR-FMLN). Efectuar sufragios en El Salvador ablandaría la opinión pública norteamericana, escéptica ante la necesidad de alianzas con regímenes tercermundistas represivos y liberaría al congreso en el otorgamiento de fondos. “El impacto político que estas elecciones pudieran tener en el ámbito interno fue siempre de poca importancia.”²

¹ Paul W. Drake y E. Silva, *Elections and Democratization in Latin America, 1980-1985*, p. 1.

² Terry Karl, “Electoralism vs. Democratization in El Salvador”, pp. 9-37, p. 13.

Terry Karl describe con claridad y precisión el grado y la profundidad de la intervención de Estados Unidos en El Salvador y su impacto en el complicado juego político, no sólo entre el gobierno y el FDR —en un contexto de sangrienta guerra civil—, sino entre las diversas facciones políticas salvadoreñas.

Las elecciones de 1982, patrocinadas por la Unión Americana, por supuesto no incluyeron al FDR-FMLN, que como fuerza política representaba a cientos de miles de votantes. Los partidos contendientes fueron la Alianza Republicana Nacional (ARENA), una alianza entre los poderosos cafetaleros y los militares —encabezados por D'Aubuisson, un hombre asociado muy de cerca con los escuadrones de la muerte salvadoreños—; el Partido de Conciliación Nacional (PCN), tradicionalmente el partido de los militares; y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyo líder era Napoleón Duarte. Los estrategas electorales norteamericanos tenían la seguridad de que este último ganaría por un amplio margen. Para su sorpresa, no fue así, y del debate político posterior a las elecciones no surgió un gobierno democrático, sino uno impuesto por el ejército bajo la presión de Estados Unidos. Los otros dos resultados fueron igualmente catastróficos: el desmantelamiento de la reforma agraria, y una renovada intervención externa en los asuntos del país —ya que el congreso estadounidense se dio por satisfecho con el proceso electoral y elevó la ayuda a El Salvador en un ciento por ciento— perpetuando así la guerra civil.

Entre 1982 y 1984 se agravó la situación interna de El Salvador. La violencia y el caos provocaron protestas internacionales ante la política de Reagan, y el congreso se negó nuevamente a otorgar más ayuda al gobierno salvadoreño. Washington recurrió al expediente electoral en 1984. Esta vez, Duarte obtuvo el 53.6% de los votos. El resultado de las elecciones fue, sin embargo, contradictorio:

Hasta donde los electores fueron libres para elegir, dada la exclusión del FDR-FMLN, y la abstención del 33% del electorado, la mayoría de los salvadoreños apoyaron una agenda de paz, una mejor distribución de la tierra, respeto a los derechos humanos, una apertura hacia el FDR-FMLN y la defensa del derecho de asociación. Pero estas preferencias eran opuestas al incremento de la escalada militar que las elecciones mismas habían hecho posible.³

La democracia debe ir precedida por un convenio político entre los contendientes. En El Salvador, ésta sigue siendo una ilusión porque el acuerdo parece ser imposible. El escenario político incluye una derecha

³ *Ibid.*, p. 28.

poderosa, una izquierda fuerte, y un empate, sin visos de solución, entre dos facciones en guerra. La presencia de Estados Unidos impide una derrota de las fuerzas armadas, mientras que la fuerza del FDR-FMLN, obstaculiza la restauración del viejo régimen.

En el caso nicaragüense, tanto John Booth como Wayne Cornelius coinciden en afirmar que la presión norteamericana apresuró el proceso y determinó que la fecha de las elecciones fuese unos días antes de las estadounidenses. Sin embargo, también apuntan que existía la voluntad, al menos en un sector de los líderes nicaragüenses —la “facción ‘pragmática’” encabezada por el candidato presidencial sandinista, Daniel Ortega, y por su hermano—, de efectuar elecciones de cualquier manera. El corazón del debate en este caso es la legalidad o invalidez del proceso electoral. El gobierno de Reagan lo etiquetó aun antes de que se llevara al cabo, como un proceso fraudulento “estilo-soviético”, sin valor alguno. Sin embargo, Cornelius y Booth llegan a la conclusión opuesta. Ambos afirman que las elecciones y la campaña electoral se efectuaron en un clima de libertad notable, dada la circunstancia del país en ese momento: un torbellino, resultado de la revolución social y la guerra civil. La Junta sandinista respetó el decreto de agosto de 1984, que había levantado las restricciones a las libertades civiles y permitió que durante la campaña se hablara libremente sobre cualquier tema con una excepción: el abstencionismo. La irrupción de las llamadas “turbas divinas” para disolver los mítines de la oposición fue, al parecer, el único hecho negativo que pudo achacarse al gobierno. Pero según Cornelius, la oposición adoptó una actitud que estuvo lejos de ser inmaculada. Los representantes del gobierno norteamericano en Nicaragua hicieron todo lo posible por que diversos partidos abandonaran la contienda electoral; la Iglesia emitió numerosos llamados en favor de la abstención y los contras, apoyados por Estados Unidos, siguieron actuando contra el gobierno durante toda la campaña.⁴

A pesar de las presiones, y bajo la vigilancia de 600 observadores internacionales, el 75% de la población registrada para votar acudió a las urnas y otorgó libremente un 67% del total de los votos al partido sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El argumento de Booth y Cornelius es convincente. De su análisis se desprende que las elecciones se dieron en un clima de libertad y legitimaron el mandato de los sandinistas. No obstante, en su afán por ha-

⁴ John A. Booth, “Election amid War and Revolution: Toward Evaluating the 1984 Nicaraguan National Elections” pp. 37-61 y Wayne A. Cornelius, “The Nicaraguan Elections of 1984; A Reassessment of Their Domestic and International Significance”, pp. 61-73.

cer válida a la Junta, Booth cae en una posición injustificable: afirmar que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no son tan graves porque “la actitud del régimen sandinista en relación con (ellos) ha sido, aun en sus peores momentos, superior a la de Honduras o inmensamente mejor que la de El Salvador o Guatemala”.⁵ No hay analogía que disculpe las atrocidades cometidas por el gobierno sandinista en contra de los indígenas miskitos. Tampoco “presión externa alguna” que justifique el endurecimiento político que se dio posteriormente a las votaciones.

El panorama post-electoral podía haber llevado al fortalecimiento de un sistema más plural de gobierno. La libertad de discusión que había prevalecido durante la campaña, proveyó al régimen sandinista “de una retroalimentación invaluable y verdadera sobre sus debilidades y aciertos”.⁶

La legitimación electoral debió haber otorgado al FSLN credibilidad externa y fuerza interna para redactar una constitución en la que participaran elementos políticos diversos, y aun institucionalizar los procedimientos democráticos. Sin embargo, señala Cornelius, no sucedió así. Inmediatamente después de las elecciones la presión militar y económica norteamericana contra Nicaragua se multiplicó. En el ámbito externo, probablemente los sandinistas perdieron más de lo que ganaron. La estrategia de Estados Unidos de desacreditar los comicios en la opinión internacional “...creando la impresión de que habían sido elecciones tramposas al estilo soviético fue básicamente, efectiva... Persuadió a la mayoría de los medios de comunicación norteamericanos y, virtualmente, a todos los miembros del congreso, de aceptar su propia construcción de la realidad; que la oposición real había sido efectivamente excluida y el gobierno sandinista seguía siendo ilegítimo”.⁷

Diffícilmente podía la Junta manejar al gobierno y la opinión pública norteamericana, pero pudo evitar que la presión de Washington repercutiera en forma perjudicial en su política interna. Las medidas gubernamentales se endurecieron, las libertades fueron nuevamente restringidas y se esfumó la disposición que habían mostrado los sandinistas para dialogar con sus opositores. Involuntariamente, tal vez, Booth y Cornelius omitieron señalar, que esta actitud de la Junta fue una manera de justificar la postura de Reagan, que erosionaba el mandato legítimo que obtuvo el FSLN en 1984.

⁵ Booth, *ibid.*, p. 53.

⁶ *Ibid.*, p. 59.

⁷ W. Cornelius, *ibid.*, p. 70.

Por lo que hace al proceso electoral mexicano en los ochenta, es sin duda el más complejo de América Latina. El juego entre las dos caras del sistema: el Estado y el partido, la complejidad del proceso de toma de decisiones y la dificultad de prever hacia dónde evolucionará el régimen, hacen de éste, un caso especialmente interesante. De los tres ensayos que se incluyen, dos son de menor importancia para el público lector en México. Middlebrook* y Molinar** analizan el trasfondo histórico del sistema hasta los setenta: su consolidación, el impacto del movimiento estudiantil de 1968, el papel de las elecciones como fuente de legitimación, el fortalecimiento de la oposición en los setenta, los resultados de la reforma electoral de 1977 y la inclusión de nuevos partidos en el juego político.

El único de los ensayos que analiza el periodo de la primera mitad de la década de los ochenta, es el de Wayne Cornelius.⁸ Este autor parte de la premisa de que la política electoral de Miguel de la Madrid ha sido ambigua. En un principio, De la Madrid adoptó una actitud democrática: el gobierno aceptó la competencia electoral en las localidades y derrotas en municipios, que incluían cinco capitales de estado. No obstante, esta tendencia se quebró abruptamente en 1983. Desde entonces, el régimen no ha reconocido un sólo triunfo de los partidos de oposición. ¿Cuál es el motivo de este cambio? Cornelius argumenta que la explicación fundamental es el enfrentamiento entre políticos y técnicos. Mientras que éstos favorecían la libertad electoral, aquéllos reaccionaron acremente ante las derrotas del Partido Revolucionario Institucional. El descontento se extendió entre los dirigentes del PRI y de la Secretaría de Gobernación: nadie quería aparecer débil e ineficiente, y poner en riesgo sus carreras políticas, al conceder posiciones clave a los partidos de oposición.⁹

El Ejecutivo, concentrado en la resolución de una crisis económica grave, cedió. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones en la historia reciente de México, esta vez el endurecimiento no acalló a la oposición. En gran parte, porque ésta no parece ser la misma oposición leal, cuya función se limitó entre los cincuenta y los setenta a legitimar al sistema. Los disturbios postelectorales de Coahuila, en diciembre de 1984, afir-

* Kevin J. Middlebrook, "Political Liberalization in an Authoritarian Regime; The Case of Mexico" pp. 73-105.

** Juan Molinar Horcasitas, "The Mexican Electoral System: Continuity by Change", pp. 105-115.

⁸ Wayne A. Cornelius, "Political Liberalization and the 1985 Elections in Mexico", pp. 115-143.

⁹ Cornelius, *ibid.*, p. 129.

ma Cornelius, evidenciaron la emergencia de una nueva generación de líderes militantes y agresivos en el seno del Partido de Acción Nacional, que se niega a aceptar las reglas tradicionales del juego político. El gobierno respondió con el recurso del fraude.

Cornelius escribió su artículo antes de las elecciones en Chihuahua a mediados de 1986. Es indudable que el modo como se efectuaron éstas, la atención que despertaron y la actitud de la oposición en la entidad —que incluyó a otros partidos además del PAN— corroboran las afirmaciones del investigador y dan aún más vigencia a la pregunta que abre la parte final de su ensayo:

¿Por qué el gobierno de De la Madrid estuvo dispuesto a pagar un costo tan alto en términos de su imagen internacional y legitimidad interna, para no ceder unos cuantos asientos en el congreso y algunos municipios?¹⁰

La respuesta es difícil. Cornelius enumera algunas hipótesis factibles, pero insuficientes. Arguye, en primer lugar, que el Presidente aceptó ese precio para evitar que surgieran divisiones en el aparato estatal y partidista. Segundo, que el Jefe del Ejecutivo fue rebasado por el juego político del PRI, el cual incluso en elecciones que sí ganó, recurrió al fraude para alterar favorablemente porcentajes, porque de esos porcentajes depende el grado de dominio de los líderes locales, lo que determina las relaciones de poder dentro del partido.

Cualquiera que sea la explicación, las consecuencias para el sistema son igualmente negativas. A pesar de que los propios panistas reconocen que necesitan organizaciones de base y un programa detallado para hacer frente al PRI, Sonora y después Chihuahua, han demostrado que el régimen no puede caer en la parálisis so pena de que sucedan serios disturbios en 1987-88. Previsiblemente la clase media será fuente de graves problemas. De acuerdo con el autor, en esta batalla, el gobierno no debería abrigar esperanzas de ganar, a menos que se dedique seriamente a rejuvenecer y transformar al PRI. Por el momento, el proceso de liberalización política en México parece haber llegado a un punto muerto:

Los posibles reformadores dentro del partido parecen estar paralizados por la profundización de la crisis económica y por el miedo de que una apertura política favorezca a sus enemigos anti-estatistas: los grandes empresarios, la Iglesia, el PAN y otros partidos conservadores de oposición.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, p. 134.

¹¹ *Ibid.*, p. 140.

A su vez, la democratización en Uruguay, Argentina y Brasil encontró salidas más airoas que las del PRI mexicano. En Argentina, los militares no tenían otra alternativa que ceder después del estrepitoso fracaso de las Malvinas; en Uruguay, el ejército, cuya autoridad había declinado considerablemente, optó por convocar a elecciones; y en Brasil, el propio ejército impulsó involuntariamente la *abertura* que culminó con la elección de un presidente civil en 1985.

Tres artículos dan cuenta de la evolución política argentina desde los cincuenta y de la transición democrática que llevó a Raúl Alfonsín al poder.* A diferencia de otras secciones del libro, estos ensayos son complementarios entre sí. Cavarozzi traza el trasfondo histórico de la transición democrática; Mora, Rock y Avellano intentan explicar el triunfo radical y sus consecuencias.

Las tres últimas décadas de la historia política argentina son, en gran parte, la del predominio del peronismo sobre el único otro partido nacional del país: la Unión Cívica Radical (UCR). Gran parte del trabajo de Cavarozzi explica los mecanismos mediante los cuales se consolidó el peronismo como la principal fuerza política desde los cincuenta: el liderazgo del general Perón, las alianzas [del movimiento peronista], la fuerza sindical y en los setenta la incorporación de los jóvenes al movimiento. La contrapartida fue la debilidad que parecía connatural al radicalismo: las divisiones dentro de la UCR, su relación con el peronismo y los sucesivos gobiernos militares del país. En el fluido relato de Cavarozzi se entiende por qué el radicalismo fue siempre, hasta los ochenta, el continuo perdedor frente al peronismo.

En los sesenta surgió un nuevo grupo disidente en el seno de la UCR: Renovación y Cambio; su líder era Raúl Alfonsín. Demandaba que el partido adoptara una actitud más militante frente a la dictadura militar e intentara movilizar a los sectores populares, incluyendo a los que tradicionalmente habían sido leales al peronismo. Ricardo Balbín, el eterno líder radical, diseñó, por el contrario, una estrategia que preveía un sistema de partidos en donde el peronismo era no sólo insustituible, sino el más probable triunfador. Sus contrincantes podían, en las elecciones de 1973, esperar tomar el poder sólo participando en el sistema como una oposición leal; el resultado fue una derrota catastrófica para la UCR. Hasta la caída de Isabel Perón la oposición leal fungió como lo había previsto Balbín, sin presentar una verdadera alternativa al peronismo

* Marcelo Cavarozzi, "Peronism and Radicalism: Argentina's Transitions in Perspective"; Manuel Mora y Araujo "The Nature of the Alfonsín Coalition", y David Rock y Suzanne Avellano "The Argentine Elections of 1983; Significance and Repercussions".

o a los militares, que acabaron por dar un nuevo golpe de estado. El regreso de los militares, la parálisis política del peronismo a raíz de la muerte de Perón y el vacío de poder creado en la UCR por la desaparición de Balbín, fueron entonces utilizados por Renovación y Cambio. Alfonsín reforzó la autoridad de los caudillos locales y los líderes de barrio o punteros e incorporó amplios sectores juveniles al partido. Proveyó a la UCR con una nueva retórica que, por primera vez desde los cincuenta, orientó los debates preliminares a las elecciones futuras:

La concepción política central en la visión del futuro en 1983 incluía el proyecto para construir la democracia, en contraste abierto con la fantasía de la generación anterior de regresar a una Edad Dorada que la represión política había negado.¹²

De esta manera, Alfonsín alteró la ecuación política entre el radicalismo y el peronismo; pero también ganó las elecciones gracias a factores socioeconómicos, por ejemplo que la clase obrera había disminuido en número. Como resultado, hubo un debilitamiento del poder de negociación de los sindicatos —la principal base de poder del peronismo—, y creció una clase media de autoempleados, quienes votaron por la UCR.

El triunfo radical no resolvió por sí mismo la inestabilidad política de Argentina. Alfonsín enfrenta enormes problemas económicos —el mayor de los cuales es, tal vez, el monto de la deuda externa—, que bien pueden hacer fracasar su gestión. Existe el peligro de que la problemática económica lleve al gobierno a recurrir al populismo o al apoyo de los sindicatos traicionando así sus ideales democráticos. Puede también preverse el caos económico y la consecuente descomposición social. Lo que no parece probable es un nuevo golpe militar. El desprestigio del ejército impide por el momento esa salida. En el peor de los casos Argentina seguiría la tradición de tener gobiernos civiles impredecibles y erráticos.

Entre los países latinoamericanos que iniciaron un proceso de democratización en los ochenta, ninguno cuenta con tantas posibilidades de éxito como Brasil. Glaucio Ary Dillon Soares y David Fleischer* analizan este hecho, y señalan que, como otros países de América Latina, Brasil sufrió una drástica transformación social y económica en las últimas décadas. Rápidamente se urbanizó y logró un sostenido crecimiento

¹² Cavarozzi, op. cit., p. 169.

* Glaucio Ary Dillon Soares, "Elections and the Redemocratization of Brazil", pp. 273-299. David Fleischer, "The Elections of 1982 and 1985 Brazil at the Crossroads", pp. 299-329.

económico; estos fenómenos tuvieron un efecto profundo en su estructura social: perdieron fuerza los partidos tradicionales y surgió una clase media participante, con altas expectativas de consumo. Durante los años del “milagro económico” —especialmente entre 1968 y 1973— el régimen militar sustentó su reclamo de legitimidad en este crecimiento económico. La crisis petrolera que debilitó el milagro económico, también erosionó las bases de legitimidad del régimen.

Se desplomó la tasa de crecimiento económico, el desempleo se elevó de manera alarmante. En suma, Brasil entró en su peor crisis económica desde la tercera década del siglo XX.

La vuelta a la democracia no se debió únicamente al desgaste de la legitimidad del gobierno, resultado de la crisis económica. A fin de cuentas, regímenes ilegítimos han permanecido en el poder por muchos años, si no décadas. A esta crisis se sumaron factores puramente políticos que permitieron que Tancredo Neves llegara al poder.

A diferencia de otros gobiernos, como el argentino y el uruguayo, para no hablar de Chile, los militares de este país no adoptaron medidas drásticas para despolitizar o desmovilizar totalmente a la población. Por el contrario, al igual que el régimen político mexicano, el brasileño siguió convocando a elecciones. El objetivo de mantener el sistema electoral era, claramente, apuntalar la legitimidad del gobierno con muy pocos riesgos. En los sesenta los militares sabían que el régimen contaba con una amplia base de apoyo político y social.

Este respaldo popular y la falta de oposición ayudaron a disfrazar el hecho de que el gobierno convocaba a elecciones sin tener la más leve intención de transferir, ni siquiera una parcela de poder, a ningún otro grupo político.

La mascarada electoral funcionó perfectamente mientras el otro elemento legitimador del sistema —el desarrollo económico— continuó sin tropiezos. Sin embargo, al desmoronarse el milagro económico, el ritual seguido en los comicios empezó a agrietarse y mostró sus riesgos, hasta entonces encubiertos o potenciales.

Se había consolidado una nueva clase política adiestrada, al menos, en la discusión de los asuntos públicos. Estos hombres descubrieron que el apoyo electoral a sus partidos —los de oposición— empezaba a crecer paralelamente al agudizarse la crisis. El gobierno ayudó inadvertidamente a este fortalecimiento de la oposición en 1979 con la “apertura política” iniciada por el gobierno del general Ernesto Geisel, quien se propuso el retorno gradual a la democracia. Buscaba restaurar el respeto a los derechos humanos y políticos y fortalecer a los partidos de oposición, pero para legitimar aún más al régimen la *apertura* suponía

que el poder quedaría en manos de los militares por largo tiempo. Empero, las expectativas individuales y partidistas de un retorno pleno a la democracia, producto de dicha *abertura*, no crecieron a la par con el ritmo lento y gradual que preveían los militares para la democratización brasileña. La distensión sumada a la crisis dio como resultado una politización acelerada, que se tradujo en la demanda de un retorno inmediato a la democracia.

Para principios de los ochenta, el gobierno tenía un sólo camino para convocar a elecciones y ganarlas: el fraude.

El golpe de muerte para los militares fue apoyar al candidato idóneo que fortalecería a la oposición y dividiría al partido oficial, el PDS: Paulo Maluf. Según Dillon Soares, la naturaleza autoritaria y antidemocrática del régimen acabó por enmohecer el funcionamiento interno de su propio partido, que hizo a un lado a los únicos candidatos que le hubieran permitido obtener un triunfo legítimo en las elecciones para presidente dentro del colegio electoral.

Así, el triunfo de Maluf se convirtió en una victoria pírrica. Los candidatos que perdieron la nominación entraron inmediatamente en negociaciones con la oposición y votaron con ella: Tancredo Neves fue electo por 480 votos contra 180 y 26 abstenciones. El resquebrajamiento del partido oficial lo había llevado al poder; si los 356 delegados del PDS en el colegio hubieran votado por Maluf, éste hubiera triunfado por una mayoría aplastante.¹³

A pesar del pronóstico optimista para la democracia brasileña, los autores no escribieron un epílogo porque ellos terminaron su estudio precisamente después de la muerte de Neves, al iniciarse la gestión presidencial de José Sarney.

ISABEL TURRENT

Roiand Trabis *Industrie et politique à la frontière Mexique-USA. Le cas de Nuevo Laredo 1966-1984*. Editions du CNRS, Paris 1985, 241 pp. 110 F.

Este estudio está tomado de la tesis de doctorado de Trabis, presentada en la Université de Perpignan en 1983. Se basa en profundas investigaciones de campo y ofrece materiales interesantes así como una interpretación válida para comprender la urbanización y la industrialización en la "periferia" de los grandes estados industriales.

¹³ Dillon Soares, *ibid.*, p. 291.

El contacto Norte-Sur a lo largo de la inmensa frontera de Estados Unidos con México tiene valor de ejemplo; en esta zona se exponen crudamente los contrastes de niveles de desarrollo entre un Norte industrial, que dispone tanto de enormes capitales como de un mercado nacional estructurado, y un Sur subdesarrollado, rico sobre todo en mano de obra pero muy poco articulado en el plano espacial.

Después de una presentación general del problema del despliegue industrial hacia las periferias subdesarrolladas —en donde al autor muestra que la intención de los países desarrollados es, la mayor parte del tiempo, únicamente desplazar algunas posiciones de las actividades industriales y no los conjuntos de éstas en su totalidad— Trabis aborda el caso mexicano, que es uno de los mejor conocidos gracias a los múltiples trabajos de economistas, sociólogos y geógrafos. El “programa de industrialización fronteriza” lanzado en 1965 logró que se instalaran varios cientos de fábricas cuyos operarios se dedicaban principalmente al montaje o ensamblaje de productos industriales destinados al mercado estadounidense. Dichas factorías son las *maquiladoras*, palabra que se ha convertido en sinónimo de zonas industriales francas para la exportación, situadas en los países pobres.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, es una de las diez ciudades donde se han instalado *maquiladoras*. Sin embargo, su actividad sólo tiene una importancia relativa. En 1984, Nuevo Laredo con sus cuatro mil obreros, dista mucho en acercarse a las cifras de Ciudad Juárez, Matamoros o Tijuana respecto de la cantidad de empleos. Para una ciudad cuya población total se calcula en 300 000 habitantes, la importancia de este peculiar sector industrial no debería ser sobrevaluada, dice Trabis, quien analiza “las especificidades socio-económicas de Nuevo Laredo”. Esta capital, fundada en la orilla mexicana del río Bravo después de la pérdida de Laredo a manos de los norteamericanos, realiza sobre todo una función de puesto fronterizo para el ferrocarril y, cada vez más, para las vías terrestres: 1 500 personas trabajan en las aduanas o como agentes de tránsito en la frontera. El comercio de la ciudad se ha adaptado a las necesidades del turismo temporal y de los habitantes de Laredo, Texas, quienes se surten de productos mexicanos cuando el cambio de la moneda les es favorable. En sentido contrario, los habitantes de esa área tamaulipeca atraviesan el río para hacer sus compras en los supermercados norteamericanos. Así, la economía local no puede ser tratada sin tomar en cuenta la ciudad gemela —Laredo— que a pesar de ser una de las menos dinámicas del estado de Texas es, sin embargo, un punto de atracción a nivel local (los depósitos bancarios y la infraestructura hotelera indican un considerable potencial). Por eso se explica que en

la orilla mexicana se acumule una población sin ningún vínculo con la oferta de empleos. Una gran cantidad de los habitantes de Nuevo Laredo trabajan en Laredo donde desempeñan pequeños oficios en el sector informal o viven del contrabando; hay otros que sólo esperan cruzar (ilegalmente) la frontera para laborar en la Unión Americana.

Los intereses de la burguesía local se identifican con el tráfico fronterizo. Son poco representativos en la industria de exportación, en donde más bien sobresalen las filiales de las sociedades transnacionales, particularmente estadounidenses. De ahí que este sector no acepte el control político impuesto por el partido oficial, el PRI, que a su vez busca la aceptación plena del concepto de Estado proveniente de la ciudad de México. El autor ha seguido de cerca la vida política local, la cual por medio de todo tipo de experiencias, a menudo violentas, exhibe la corrupción cada día más creciente del sistema de "partido único" y las contradicciones que se dan en su interior.

Los capítulos dedicados a la estructura del empleo en las *maquiladoras* y a su impacto económico reúnen una gran información recabada mediante encuestas realizadas por Trabis, en la que se confirman resultados de otros estudios realizados en las zonas francas de Asia y del Caribe: la importancia de la mano de obra femenina, su rápida mutación, el bajo nivel de salarios —lo que junto con la proximidad geográfica sirve de incentivo a los inversionistas— y la debilidad del aporte tecnológico.

Un aspecto que caracteriza a este sector económico es su fragilidad en relación con la coyuntura económica. La actividad de las *maquiladoras* de Nuevo Laredo literalmente se derrumbó entre 1973 y 1976. De 1976 al 1980 la recuperación fue lenta, mientras que después de 1980 la actividad se ha sostenido. Dentro de esta evolución irregular cabe mencionar el factor internacional, en este caso las variaciones de las tasas de crecimiento norteamericano —de las cuales dependen íntimamente esas industrias— y también las condiciones locales que originan ganancias, o por el contrario, pérdidas, todo en un corto tiempo. De esta manera, el derrumbe de Nuevo Laredo se produce en forma simultánea con una serie de conflictos de trabajo, —huelgas entre ellos— y con una frágil coyuntura económica allende el río Bravo. En la medida en que las inversiones por puesto de trabajo son débiles, las industrias de montaje resultan eminentemente móviles. Circunstancias de diferente naturaleza pueden conllevar a un desplazamiento de las actividades de una zona franca a otra dentro de un mismo país, o de una nación a otra. También ha sucedido que algunas industrias para la exportación se transforman, orientándose hacia el mercado nacional.

La crisis financiera y económica que vive México desde 1982 es, para el autor, un dato "revelador de la estructura fronteriza". En periodo de crisis, la frontera se hace todavía más dependiente de la actividad económica norteamericana. Las devaluaciones del peso han motivado inversiones estadounidenses, y los candidatos a la emigración son cada vez más numerosos. Por el contrario, el contrabando y el comercio local revelan una baja muy marcada. A nivel político, el PRI mantiene el control de la situación, pero únicamente con escaso margen. La confederación de trabajadores de México, CTM, está muy desacreditada a nivel general; correlativamente, el partido de oposición más importante, el PAN, va ganando más y más adeptos.

Finalmente, y desde otro punto de vista, es lamentable que un trabajo tan serio sea presentado en una edición mediocre. Hay, además, muchos errores en el texto, lo que da la impresión de que no se realizaron las correcciones marcadas en las pruebas. Además, no hay numeración ni en cuadros ni en diagramas, hecho molesto para el lector. Tiene, en cambio, amplia y adecuada bibliografía y una caricatura bien lograda en la portada.

CHRISTIAN A. GIRAULT